



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**PROCESO: ORDINARIO LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL.**

**DEMANDANTE: NELLY ISABEL VILLA DE JIMENEZ.**

**DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.**

**RADICACIÓN: 08-001-31-05-013-2023-00273-00.**

INFORME SECRETARIAL: Señor Juez, a su Despacho la presente demanda digital ordinaria informándole que por reparto de la Oficina Judicial correspondió a este Juzgado, la cual se encuentra radicada, siendo menester indicar que eventualmente daría lugar a declarar la falta de competencia para conocer del presente asunto. Es de anotar que el Titular del Juzgado estuvo en labores de escrutinios del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2.023. Así mismo, que la Secretaría del Juzgado, frente a la cual hubo cambio de secretario está en labores de organización para el trámite de los procesos activos y depuración de archivos con ocasión a la restante digitalización del Juzgado frente expediente anteriores a este. Sírvese a proveer.

Barranquilla, 29 de febrero de 2024.

MARIA B. POTES SANTODOMINGO  
Secretaria.

**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.** Barranquilla, veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2.024).

Visto y constatado el informe secretarial que antecede, en efecto al revisarse el expediente, sería del caso entrar a avocar el conocimiento del presente proceso, pero se observa que estamos en presencia de una de las causales de rechazo de demanda por falta de jurisdicción y competencia toda vez que lo que se pretende en este asunto es la reliquidación de la pensión de vejez con fundamento en el Régimen de Transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 a cargo de la demandada COLPENSIONES, en donde la actora invoca que laboró con la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, tal como lo se corrobora de las documentales aportadas al expediente digital, de donde a su vez se extrae que el último cargo que ejerció fue el de Registrador Municipal con el cual causó el derecho pensional.

Ahora bien, si bien el numeral 4º del art. 2º del CPTSS modificado por la Ley 712 de 2001, y posteriormente modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2.012, señala taxativamente que entre los asuntos que conoce la jurisdicción ordinaria laboral se encuentran **“Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos(...)”**

No es dable desatender que para la época en que se fue promovida la demanda ya se encontraba vigente el artículo 104 del C.P.A.C.A <Ley 1437 de 2.011><sup>1</sup>, el cual dispone que: **“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”, e igualmente que conocerá entre los siguientes procesos “4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”.**

Efectivamente, viene acreditado en el caso bajo estudio con los documentos anexos de la demanda,

<sup>1</sup> Ley 1437 de 2.011. Artículo 308.-“Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauran con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

Consejo Superior de la Judicatura  
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico  
**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

que la demandante ostentó la calidad de empleada pública al haber sido incorporada en la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el cargo de Registrador Municipal mediante Resolución No 120 de 2002 con fundamento a que el anterior empleo que desempeñaba fue suprimido y optó por ser reincorporada, observándose a su vez que su empleadora es un órgano constitucional conforme al artículo 120 de la Constitución Política y una entidad estatal según el artículo 2º de la Ley 80 de 1.993, sin que se constituya la excepción prevista en el numeral 4º del artículo 105 del C.P.A.C.A<sup>2</sup>. al no versar el presente asunto sobre un conflicto de carácter laboral entre un trabajador oficial y entidades públicas, de modo que se imposibilita de esta manera la aplicación del artículo 2º del C.P.T.S.S. en relación a los asuntos que competen a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, al tratarse del reconocimiento y pago de una reliquidación de la pensión de vejez que se solicita a cargo de una entidad de derecho público, quien invoca su calidad de ex empleada pública con base en el Régimen de Transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, e incluso causó el derecho pensional ostentando dicho empleo.

Además, con respecto a la aplicación de la Ley 712 de 2001, el Consejo de Estado en sentencia de fecha treinta (30) de abril de dos mil tres (2003), Exp. No. 0581-02, Actor: Dolores María (Lola) de la Cruz de Pastrana, Magistrado Ponente Dr. Jesús María Lemos Bustamante, expresó:

*“Los conflictos relacionados con los regímenes de excepción establecidos en el artículo 279 de la ley 100 de 1993 no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral, “por tratarse de regímenes patronales de pensiones o prestaciones que no constituyen un conjunto institucional armónico ya que los derechos allí regulados no tienen su fuente en cotizaciones ni en la solidaridad social, ni acatan las exigencias técnicas que informan el sistema de seguridad social integral...”, como lo expresó la Sentencia C-1027 de 27 de noviembre de 2002, M.P. Dra. Clara Inés Vargas H.*

*En la sentencia aludida, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4º del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo, la Corte Constitucional en cuanto a los regímenes de transición dijo:*

*“Todo lo dicho también es aplicable a los regímenes especiales que surgen de la aplicación de la normatividad de transición contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque a pesar de la uniformidad normativa que intentó ese ordenamiento, dejó a salvo para efectos de edad, tiempo de servicios, de cotizaciones y monto de la pensión, los estatutos legales o reglamentarios de quienes al momento de la vigencia de la ley tenían más de 35 años de edad (mujeres) o más de 40 (hombres) o más de 15 años de servicios. Para esos afiliados, si bien el ingreso base de liquidación se sujetó a la nueva ley, no se aplica a plenitud el sistema de seguridad social integral, sino la normativa especial anterior en el evento de que resultare más favorable al afiliado o beneficiario del sistema general de pensiones. Al no tratarse en rigor de pensiones del sistema de seguridad social integral, no existe impedimento constitucional alguno para que la competencia se mantenga incólume como venía antes de la expedición de la Ley 712, por las razones explicadas en precedencia.*

*... tal determinación corresponde a la facultad del legislador para configurar el régimen de la seguridad social y las instituciones procesales sin desarticular el concepto de seguridad social que consagra el artículo 48 Superior, respetando el principio del juez natural para la resolución de los conflictos que versen sobre esta materia (CP art. 29)”.*

*Conviene precisar que a contrario sensu, en lo que no conforma el sistema de seguridad social integral por pertenecer al régimen de excepción de la aplicación de la Ley 100 de 1993 o los regímenes especiales que surgen de la transición prevista en este ordenamiento legal, se preservan las competencias establecidas en los Códigos Contencioso Administrativo y Procesal del Trabajo, según el caso, y por tanto sí influye la naturaleza de la relación jurídica y los actos jurídicos que se controviertan, en la forma prevenida en los respectivos estatutos procesales.*

*Así las cosas, los conflictos jurídicos sobre prestaciones sociales de los empleados públicos cobijados por el régimen de transición de pensiones, en criterio de la Sala, están excluidos de la competencia de la jurisdicción ordinaria pues de ellos conoce el juez natural competente según la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controvierten, sin que ello tenga porqué originar conflictos de jurisdicciones entre la ordinaria y la contenciosa administrativa.” (Subraya el despacho).*

<sup>2</sup> Ley 1437 de 2.011. Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:(...) 4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”.

Consejo Superior de la Judicatura  
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico  
**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Igualmente, en la sentencia del 10 de Septiembre de dos mil nueve (2009). Rad. No.73001-23-31-000-2006-01750-01(0475-08), la misma Corporación sostuvo:

“(....)

*Bajo estos supuestos, se excluyen del conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral los regímenes exceptuados por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y los conflictos surgidos del régimen de transición de las pensiones de jubilación de los empleados públicos en razón a la aplicación de normas anteriores.*

*Por su parte, la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral preceptuó en relación con el campo de aplicación:*

**ARTICULO. 11.-** Modificado por el art. 1, Ley 797 de 2003 **Campo de aplicación.** El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.

Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.

Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes.

*En este orden de ideas, la Ley 100 de 1993 dispuso conservar y respetar los derechos, beneficios y garantías adquiridas conforme a las disposiciones normativas anteriores, de quienes a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, se encontraban disfrutando de la pensión o hayan cumplido los requisitos para acceder a ella.*

*Como en este caso la controversia gira en torno a la sustitución de una pensión de jubilación, con ocasión al fallecimiento del señor Hernando Aguirre Barragán quien gozaba de esta prestación reconocida con base en lo dispuesto en la Ley 4ª de 1966, y los Decretos 2733 de 1969, 1848 de 1969, normas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, **la competencia se rige por las reglas específicas que regulan las prestaciones de los servidores públicos.***

*Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para conocer del presente asunto, como quiera que se trata de un conflicto jurídico sobre una prestación social que fue reconocida a un empleado público con normas anteriores a la Ley 100 de 1993.*

*(...).”*

Por su parte, en este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, esgrimió:

“(....)

*Así las cosas, **es cierto que el Consejo de Estado, la Corte Constitucional al resolver sobre la inconstitucionalidad contra el numeral 4º del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 y esta Corporación con ocasión de la expedición de las Leyes 362 de 1997 y 712 de 2001, han sentado de manera uniforme el criterio que en tratándose de pensiones que se encuentran incluidas en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que corresponden a prestaciones solicitadas por empleados públicos, la jurisdicción competente para resolver los conflictos que se presenten es la contenciosa administrativa y no la ordinaria.***

*En consecuencia, para la Sala en principio la jurisdicción ordinaria no tiene el conocimiento de las controversias donde se encuentre involucrada una persona que teniendo la calidad de empleado público, se acoge al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la nueva ley de seguridad social que se refiere a la aplicación de normas anteriores a su creación, tal como se señaló entre otras, en las sentencias del 6 de septiembre de 1999 radicados 12054 y 12289, del 29 de marzo de 2000 radicación 13521, del 21 de noviembre de 2001 radicado 16519 y 29 de octubre de 2003 radicación 21496, reiteradas en decisión del 22 noviembre de 2005 radicado*

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.

Telefax: 3885156 / 3885005 EXT. 2030. [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)

Barranquilla – Atlántico. Colombia

**Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co**



Consejo Superior de la Judicatura  
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico  
**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

25498...”(Subrayado y negrilla fuera de texto) <Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Recurso de Revisión Rad. 28863 M.P. Luis Javier Osorio López.>

De acuerdo con estos criterios jurisprudenciales que inclusive datan antes del CPACA y el CGP, si la edad, el tiempo de servicio o número de cotizaciones se han de dilucidar con normas que regulan los derechos de los empleados públicos, las cuales son anteriores a la Ley 100 de 1.993, la controversia también debe ser dirimida por la jurisdicción contencioso administrativa.

Es más, refuerza lo anterior, lo dicho por la Corte Constitucional al dirimir un conflicto de jurisdicción en el Auto 336 de 2.023<sup>3</sup>, M.P. Dra. Paola Meneses Mosquera, entre otros, en el sentido de indicar como regla de decisión que se debe tener en cuenta como requisito del cumplimiento de los requisitos exigidos por el numeral 4º del artículo 104 de la Ley 1487 de 2.011 para asignarle la competencia de un asunto de reliquidación pensional contra una entidad de derecho público a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si el demandante tuvo la calidad de empleado público al momento de causar la pensión, lo cual también acontece en el presente caso.

Luego, fuerza concluir que el presente caso no es de conocimiento de esta Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, dado que la Especialidad o Jurisdicción Administrativa es la competente para avocar el conocimiento de las pretensiones formuladas en el presente proceso al no ser posible entrar a decidir sobre las mismas en razón al tipo de controversia que se suscita entre las partes y la calidad que emana de ellas.

Con base en lo anterior, se impone rechazar la demanda por falta de jurisdicción, y se ordenará remitir el expediente a través de la oficina judicial respectiva a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por ser la competente para avocar el conocimiento de las pretensiones formuladas dentro del presente juicio, a fin que la demanda sea repartida entre los Jueces Administrativos del Circuito de Barranquilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del C.G.P., aplicable por integración normativa en materia laboral por disposición del artículo 145 del C.P.T.S.S., en concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-807 de 2009.

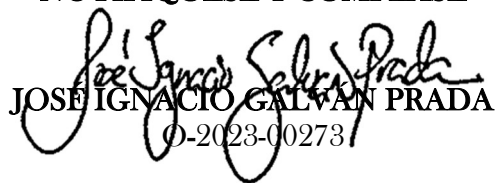
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** RECHAZAR la demanda por falta de jurisdicción. En consecuencia, se ORDENA remitir el expediente a la oficina judicial respectiva para que sea repartido entre los Juzgados Administrativos del Circuito de Barranquilla, para lo de su competencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del C.G.P., aplicable por integración normativa en materia laboral por disposición del artículo 145 del C.P.T.S.S.-

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**EL JUEZ,**

  
JOSE IGNACIO GALVAN PRADA  
0-2023-00273

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla  
Día 05 Mes 03 Año 2024  
Notificado por el Estado N° 038  
La Providencia de fecha Día 29 Mes 02 Año 2024  
La secretaria María Bernarda Potes Santodomingo

<sup>3</sup>M.P. Dra. Paola Andrea Meneses Mosquera.